



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
GENERAL

E/CN.4/2000/68/Add.3
27 de enero de 2000

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
56º período de sesiones
Tema 12 a) del programa provisional

INTEGRACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Y LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO: LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre
la violencia contra la mujer, incluidas sus causas y consecuencias,
presentado de conformidad con la resolución 1997/44
de la Comisión de Derechos humanos

Adición

Informe sobre la misión a Haití

ÍNDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	1 - 5	3
II. OBSERVACIONES GENERALES	6 - 9	4
III. OBSERVACIONES.....	10 - 61	5
A. La violencia doméstica	31 - 35	11
B. Violación y abusos y acoso sexuales.....	36 - 40	13
C. Mujeres detenidas	41 - 47	14
D. Violación política	48 - 61	16

ÍNDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
IV. EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y DE MUJERES	62 - 73	21
V. RECOMENDACIONES	74 - 84	24
A. A nivel internacional	74 - 75	24
B. A nivel nacional.....	76 - 84	25
<u>Anexo:</u> Lista selectiva de personas con las que se entrevistó la Relatora Especial durante su visita		26

I. INTRODUCCIÓN

1. Como complemento de la resolución 1999/77 de la Comisión de Derechos Humanos, titulada "Situación de los derechos humanos en Haití", en la que la Comisión invitaba una vez más a la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer a que considerase favorablemente la invitación del Gobierno de Haití para visitar ese país, la Relatora Especial así lo hizo del 14 al 17 de junio de 1999. Las investigaciones de la Relatora Especial se centraron en la violencia ejercida contra la mujer en Haití y en los mecanismos de respuesta existentes, incluidas las instituciones judiciales y de aplicación de la ley, y en particular en las violaciones con fines políticos cometidas contra mujeres durante el régimen militar de 1991 a 1994.
2. La Relatora Especial desea expresar su agradecimiento por la cooperación y asistencia del Gobierno de Haití y, en particular, de la Sra. Nonie Mathieu, Ministra de la Condición de la Mujer, y el personal a su cargo, lo que le permitió reunirse con representantes de todos los sectores pertinentes de la sociedad y obtener la información y documentación necesarias para informar a la Comisión de Derechos Humanos de manera objetiva e imparcial.
3. La Relatora Especial expresa también su profundo reconocimiento por la eficiente cooperación y apoyo prestados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en especial la Sra. Jaqueline Rips, especialista en cuestiones de género, gracias a lo cual la visita resultó provechosa desde el punto de vista sustantivo y logístico. La Relatora Especial desea dar las gracias asimismo al Sr. Julian Harston, Representante Especial del Secretario General, y al Embajador Colin Granderson, Director Ejecutivo de la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH), por haberle facilitado una mejor comprensión del contexto político, económico y social del país en el momento de su visita.
4. Durante su misión, la Relatora Especial se reunió con representantes de alto nivel del Gobierno, a saber, la Sra. Geri Préval, Primera Dama de Haití, el Sr. Jacques Alexis, Primer Ministro de Haití, y la Sra. Frederika Alexis, Ministra de la Condición de la Mujer, así como el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia, la Ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, el Director General de la Policía Nacional y el Defensor del Pueblo. La Relatora Especial también se reunió con representantes de organizaciones no gubernamentales y agrupaciones de mujeres y entrevistó a más de 30 mujeres víctimas de violencia. Además, visitó una cárcel de Puerto Príncipe, Fort National, y mantuvo conversaciones con las reclusas.
5. La Relatora Especial desea expresar su sincero agradecimiento a todas las mujeres que, a pesar de la fuerte tensión emocional, consintieron en relatarle sus historias personales para que pudiera tratar de comprender al menos parte del sufrimiento que habían soportado. La Relatora Especial quedó profundamente impresionada por la firme determinación de todas las mujeres que conoció y su empeño en que se hiciera justicia a pesar de los muchos obstáculos existentes.

II. OBSERVACIONES GENERALES

6. Haití sigue siendo el país más pobre y menos industrializado del hemisferio occidental. Su tasa de crecimiento económico es de 1,3 a 2%, y más del 70% de sus 7 millones de habitantes viven en condiciones de pobreza extrema, completamente al margen de la acción del Estado y de cualquier servicio. El 6% de la población controla el 66% de la riqueza del país.

Las instituciones financieras internacionales calculan que, aunque Haití registrara una tasa de crecimiento económico del 7% en los próximos diez años, el 60% de la población seguiría viviendo en condiciones de pobreza extrema. Se ha calculado que alrededor del 70% de la población carece de toda relación con el Estado, lo cual da lugar a una situación que a menudo se ha denominado síndrome del "Estado colapsado".

7. Esta es la cruda realidad en la que una nueva cultura política de democracia y tolerancia está tratando de enraizar de modo sostenible. La seguridad humana es peligrosamente débil, la esperanza de vida al nacer es de 53,7 años¹ como promedio, más del 50% de la población carece de acceso a agua potable, servicios de salud y servicios de saneamiento, y la violencia impera en Haití. Tras las horribles manifestaciones de violencia política, incluida la violación política, que se produjeron durante las dictaduras de los Duvalier y recientemente de 1991 a 1994, tras el golpe de Estado militar, las mujeres haitianas siguen padeciendo lo que algunos interlocutores han denominado "violencia estructural", que se concentra en los sectores más vulnerables y pobres.

8. Además, el deterioro de la infraestructura, la superpoblación urbana y la violencia se ven agravadas por lo que un autor califica de "extrema polarización política, divisiones de clases y una identidad nacional fracturada"². En 1999, tras cinco años de gobierno democráticamente elegido, Haití sigue sin un sistema judicial, el Parlamento hace dos años que no se reúne y la seguridad del país sigue dependiendo en gran medida de la presencia de una fuerza de policía internacional, que apoya a la joven e inexperta policía civil en sus primeros cuatro años de existencia. El progreso económico, político y social es lamentablemente lento y la comunidad internacional está cansada de esperar -la fatiga de los donantes ha empezado a ser visible, y está prevista la retirada a fines de 1999 tanto de la MICIVIH como de la Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití (MIPONUH), así como de la presencia internacional bilateral en el país. Las perspectivas son sombrías, y existe el riesgo de un vacío que empeorará aún más la situación.

9. En el momento de redactar este informe, se esperaba que la Asamblea General aprobara un proyecto de resolución en el que se autorizase una nueva presencia de las Naciones Unidas en Haití, después de que los mandatos de la MICIVIH y la MIPONUH hubieran expirado.

Basándose en las recomendaciones de una misión interinstitucional y multidisciplinaria de evaluación de las Naciones Unidas que visitó Haití en octubre de 1999, se preveía que la nueva presencia de las Naciones Unidas estuviese formada por tres pilares básicos, que prestasen apoyo

¹ PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1999.

² Robert Rotberg, ed., Haiti Renewed: Political and Economic Prospects, World Peace Foundation, 1997, Virginia, pág. 2.

y asistencia, respectivamente, al poder judicial, a la policía y a la protección y promoción de los derechos humanos.

III. OBSERVACIONES

10. La mayoría de los interlocutores de la Relatora Especial calificaron a Haití como sociedad estructural e intrínsecamente violenta en la que la violencia contra la mujer se manifestaba en todas sus formas. Otros observaron que en la sociedad haitiana no creía que hubiera una cultura de violencia contra la mujer en particular, sino que la violencia general que afectaba a la mujer era consecuencia de una cultura de represión de los más vulnerables o inferiores. Hace muy poco que las mujeres dejaron de ser consideradas por la ley menores de edad en Haití. En una situación económica difícil, en la que más del 80% de la población vive en condiciones de extrema pobreza, la violencia no puede sino aumentar, con la consiguiente privación de los derechos humanos a toda la población. El propio Ministro de Justicia expresó la opinión de que las violaciones de los derechos humanos de la mujer en Haití no sólo son incidentales sino estructurales. El Ministro de Relaciones Exteriores reconoció que "la situación de la mujer en Haití no es ideal", pero consideró que las personas que ejercían el poder político creían en los derechos humanos de la mujer. Al mismo tiempo, reconoció que, debido a la falta de garantías legales para la mujer, su situación era muy difícil. El Ministro dijo que podrían presentarse nuevos proyectos de ley de reforma de la legislación relativa a los derechos de la mujer, en cooperación con el Ministerio de la Condición de la Mujer, cuando empezara a funcionar el Parlamento en enero de 2000.

11. A juicio de la Ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, la causa fundamental de la persistencia de la violencia contra la mujer era en gran parte financiera, ya que mujeres económicamente independientes no se dejarían golpear sin reaccionar. Calculaba que el 90% de las mujeres haitianas eran víctimas de violencia; la situación se agravaba debido a la cultura machista aún imperante. Por consiguiente, su Ministerio había organizado en todas las provincias talleres para ayudar a aumentar la independencia de la mujer. Esos talleres tienen por objeto proporcionar a las mujeres formación profesional y mejorarla, por ejemplo artesanías y oficios, a fin de descentralizar la migración y aumentar la especialización y las capacidades de las mujeres. De 1991 a 1994, el Ministerio también instaló en la penitenciaría nacional talleres de artesanía para las reclusas, las cuales vendían los productos en el exterior. Los ingresos, que ascendieron a 50 dólares por semana, ayudaron a las reclusas a mantener a sus hijos desde la cárcel.

12. La mayoría de los interlocutores de la Relatora Especial, incluido el Ministro de Justicia, reconocieron la necesidad urgente de llevar a cabo una reforma judicial a fin de armonizar la legislación de Haití con las obligaciones que incumben a ese país en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos. El marco legal referente a la violencia contra la mujer es especialmente inadecuado. Un representante de las Naciones Unidas expresó la opinión de que "la falta de un sistema judicial eficiente es quizá la violación más graves de los derechos humanos en Haití".

13. En el momento de la visita de la Relatora Especial, el nuevo Ministro de Justicia acababa de tomar posesión de su cargo. No obstante, quedó impresionada por la franqueza del diálogo que había mantenido con el Ministro, quien sin duda tenía un profundo conocimiento de las

carencias del sistema judicial de Haití; sobre esa base formuló diversas estrategias para afrontar esos problemas en el futuro. La Relatora Especial espera que, con posterioridad a su visita, algunas de las reformas mencionadas en sus conversaciones con el Ministro se hayan llevado a la práctica.

14. El Ministro admitió francamente que la legislación nacional, y en particular el Código Civil, discriminaba a la mujer, y declaró que estaba trabajando con una comisión de expertos en una reforma legislativa general. Con ese fin había aumentado el personal con objeto de presentar 30 proyectos de ley relativos a la revisión legislativa, incluidos un nuevo Código Penal y un nuevo Código de Procedimiento Penal, al nuevo Parlamento, que se elija en enero de 2000. Asimismo, el Ministro tenía la intención de proponer la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que Haití aún no era parte, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la armonización de la legislación nacional con las obligaciones de Haití en virtud del derecho internacional. Se reconocía en general que, aunque Haití se había adherido a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer desde 1981 y había ratificado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) en 1996, la aplicación nacional de las obligaciones que le incumbían en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos era muy insuficiente.

15. La Relatora Especial expresa su especial preocupación por el hecho de que Haití no haya presentado ningún informe en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en violación de su artículo 18, que prevé la presentación periódica de informes sobre la aplicación de la Convención. Haití debía haber presentado su informe inicial en 1982 y los informes periódicos subsiguientes cada cuatro años a partir de esa fecha, es decir, en 1986, 1990, 1994 y 1998. La Relatora Especial insta firmemente al Gobierno de Haití a que coopere con las organizaciones no gubernamentales y las agrupaciones de mujeres en la preparación de un informe de síntesis detallado para presentarlo sin más demora al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

16. El Ministro consideraba que el nuevo marco legislativo propuesto permitiría al sistema judicial nacional abordar diversos aspectos de los derechos humanos de la mujer de manera más eficaz. El Ministerio de Justicia podría cooperar, en particular, con el Ministerio de la Condición de la Mujer a fin de enfocar de manera más equilibrada y mejor fundamentada la cuestión de la violencia contra la mujer.

17. El Ministro consideraba que era indispensable modernizar la legislación y elaborar nuevos instrumentos legales, pero debían establecerse al mismo tiempo nuevas instituciones judiciales -el único modo de cambiar el sistema de manera perdurable. Por consiguiente, el Ministro estaba trabajando en la elaboración de un programa de formación revisado para una nueva generación de jueces y estaba negociando el aumento de sus sueldos a fin de atraer a personas competentes al sistema judicial. El Ministro informó a la Relatora Especial de que, a petición suya, se habían incluido las cuestiones relativas a los derechos humanos y la violencia doméstica en el programa revisado de formación de jueces. En septiembre de 1999 se impartiría capacitación a 100 nuevos jueces con arreglo al programa revisado. El objetivo era formar

a 500 nuevos jueces en un período de 5 años. En el momento de la visita de la Relatora Especial, ya habían entrado en el sistema 60 nuevos jueces.

18. Cuando la Relatora Especial preguntó acerca de la falta de un código de la familia, el Ministro de Justicia indicó que examinaría la posibilidad de cooperar con el Ministerio de la Condición de la Mujer en la posible redacción de un código de ese tipo.

19. El Ministerio de la Condición de la Mujer, que se creó en 1994, tiene representación en todas las provincias. También tuvo en el pasado coordinadores a nivel comunitario en todas las provincias, pero debido a la falta de recursos financieros tuvo que eliminar esos puestos. Esto afectaba gravemente al ámbito de acción y la capacidad de promoción del Ministerio. A fin de combatir la tendencia a no presentar informes y a adoptar una actitud tolerante con respecto a la violencia contra la mujer, el Ministerio de la Condición de la Mujer ha iniciado una campaña de radio y televisión en la que denuncia la violación como delito. El Ministerio también ha participado, en cooperación con organizaciones de mujeres, en un comité de negociación con los parlamentarios (Comité de Négociation avec les Parlementaires), con objeto de presentar al Parlamento nuevos proyectos de ley sobre la violación, los abusos sexuales, incluido el acoso sexual, y la violencia doméstica, conforme a las obligaciones que incumben a Haití en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial la Convención Interamericana de Belém do Pará. Sin embargo, no se han realizado progresos en este sentido ya que la asamblea legislativa llevaba casi dos años sin reunirse en el momento de la visita de la Relatora Especial. Ésta, no obstante, consideró alentador este diálogo entre las organizaciones de mujeres y los parlamentarios, aunque la reforma legislativa únicamente afecta a una de las cuatro esferas prioritarias identificadas por las organizaciones de mujeres (despenalización del aborto en ciertas circunstancias, protección jurídica de las empleadas del hogar, despenalización del adulterio y nueva definición de la violación).

20. La Relatora Especial también observó con satisfacción que las organizaciones de mujeres del Comité, que cooperan con el Ministerio, habían traducido al creole la Convención de Belém do Pará y la estaban difundiendo activamente. La Relatora Especial acogió con agrado la indicación de que el Comité estaba coordinando la redacción del informe periódico de Haití en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, especialmente en vista del considerable retraso registrado en el cumplimiento por Haití de sus obligaciones en materia de presentación de informes.

21. La Relatora Especial se interesó especialmente por el "Projet Plaidoyer", iniciado por el Comité en cooperación con el Ministerio de la Condición de la Mujer. Se trata de un proyecto piloto que ofrece asistencia y representación jurídica a las mujeres víctimas de violencia. El proyecto concede prioridad a los casos de violación política y violencia contra las mujeres denunciados a la Comisión de la Verdad y la Justicia. Los abogados y los coordinadores provinciales del Ministerio cooperan en la realización de investigaciones con miras a presentar ante los tribunales de las provincias de origen los casos de mujeres víctimas de violencia, y sentar jurisprudencia. La Relatora Especial desea expresar su firme apoyo a esa iniciativa y espera que haya progresado desde su visita.

22. En el momento de la visita de la Relatora Especial, la MIPONUH contaba con 147 policías internacionales en el país y tenía el mandato de profesionalizar la fuerza de policía de Haití. La MIPONUH ayudó a crear la Policía Nacional de Haití en 1995 y actualmente se le ha

encomendado la tarea de asistir a la Policía Nacional en su labor. Debe tenerse en cuenta que la fuerza de policía de Haití se estableció hace poco más de cuatro años y, en vista de las enormes presiones a que se ve sometida, es muy frágil e inexperta. Es la primera vez que Haití tiene una policía nacional civil; la transición de una mentalidad de ejercicio de poder y de instrumento de represión a la de servicio y protección no ha sido fácil. La Oficina del Inspector General de la fuerza de policía nacional es un mecanismo interno de vigilancia, que lleva a cabo investigaciones internas de los casos de abuso de poder y violaciones cometidos por sus miembros. La investigación interna, a la que contribuye la MICIVIH proporcionando información sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos, se traduce en recomendaciones relativas a las sanciones y las medidas disciplinarias que han de aplicarse en cada caso. No obstante, esta decisión administrativa no cuenta con el apoyo de un sistema judicial, por lo que esos mecanismos internos de control son ineficaces. La Oficina del Defensor del Pueblo también se ocupa de las denuncias de brutalidad policial que se cursan al inspector general. No obstante, el Defensor del Pueblo se quejaba de los graves retrasos que sufrían las investigaciones de la Oficina del Inspector General. Por otra parte, como la mayoría de las investigaciones se traducen en medidas disciplinarias en vez de en una indemnización, la Oficina del Defensor del Pueblo está tratando de obtener representación legal para los demandantes más pobres a fin de poder someter los casos ante los tribunales para obtener compensación.

23. La Relatora Especial se declara especialmente complacida por las conversaciones abiertas y sustantivas que había mantenido con el Jefe de la Policía, Sr. Pierre Denizé, teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeña la policía en la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer en las comunidades. Al principio, el Jefe de la Policía señaló que no era sorprendente que hubiera habido que pagar cierto precio por la formación acelerada de 5.300 agentes en 1994 durante cuatro meses y su posterior despliegue en todo el país sin supervisión ni "apoyo". El Jefe de la Policía también indicó que era consciente tanto personal como institucionalmente del problema de la violencia contra la mujer y de la necesidad de una mejor formación de la policía a ese respecto. Informó a la Relatora Especial de que la formación básica de la policía se había ampliado recientemente de cuatro a nueve meses, conforme al criterio de que la policía podía y debía actuar como agentes del desarrollo en las comunidades. La nueva formación incluye algunos componentes de los derechos humanos de la mujer y de la violencia contra la mujer. El Jefe de la Policía indicó que tenía la intención de seguir cooperando con la Ministra de la Condición de la Mujer y con las asociaciones de mujeres en esas esferas.

24. La delegación de la Relatora Especial pudo observar un curso de formación relativo a la violencia contra la mujer impartido por la MICIVIH. El curso consistía en una útil combinación de capacitación en los instrumentos jurídicos internacionales, regionales y nacionales que protegen a la mujer contra la violencia y debates sobre los aspectos culturales y tradicionales de esa violencia en la sociedad de haitiana. Esa formación, proporcionada por un consultor local, en cooperación con el personal internacional de la MICIVIH, estimuló la reflexión sobre un tema que los jóvenes policías en su mayoría varones, reconocieron que era una cuestión que afectaba desde hacía mucho tiempo a las mujeres y niñas de haitianas. La Relatora Especial elogia este tipo de formación, que también pone de manifiesto la eficacia de la cooperación con un facilitador local que conoce las tradiciones y el idioma locales y también las normas internacionales pertinentes.

25. El Jefe de la Policía también reconoció que, además de mejorar la formación, debería revisarse todo el sistema de presentación por las víctimas de denuncias a la policía. Le preocupaba mucho la respuesta a la denuncia de un delito, inclusive de violencia contra la mujer, que presuntamente era lenta y poco eficaz. En cuanto a la participación de la mujer en la fuerza de policía, en junio de 1999 sólo había poco más del 7% de mujeres agentes de policía. El Jefe de la Policía indicó que estaba examinando la posibilidad de establecer cuotas, al mismo tiempo que trataba de mejorar las condiciones de trabajo de las agentes, incluido el trato que recibían de sus compañeros y jefes.

26. En respuesta a una pregunta sobre la procedencia militar de algunos agentes, el Jefe de la Policía dijo que no tenía sentido hablar de esta "categoría" de personal, ya que su número era insignificante y el porcentaje de violaciones de los derechos humanos cometidas por ellos era nulo. No obstante, el Jefe de la Policía señaló a la atención el hecho de que la fuerza de policía de Haití era producto de una sociedad cuyo desarrollo histórico suponía una falta de reconocimiento y de experiencia de toda política institucional de derechos humanos. A su juicio, para romper la tradición de impunidad se debía investigar y dar publicidad a las violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de la policía. Con ese fin se había reforzado el mecanismo interno de investigación, a saber la Oficina del Inspector General, como consecuencia de lo cual se había expulsado a más de 600 funcionarios (alrededor del 10% de un total de 6.100 agentes en junio de 1999), de los cuales 100 aproximadamente habían sido entregados para su procesamiento. El Jefe de la Policía consideraba que los excesivos retrasos por parte de la Oficina del Inspector General denunciados por algunas organizaciones no gubernamentales y por la Oficina del Defensor del Pueblo se debían simplemente a la sobrecarga de trabajo. Con respecto a los destrozos causados por la policía durante un registro de la clínica de Solidarité femmes haïtiennes (SOFA), el Jefe de la Policía indicó que el Inspector General se estaba ocupando del asunto.

27. El Jefe de la Policía hizo hincapié en el efecto que la inoperancia del sistema judicial puede tener en la eficiencia de la fuerza de policía. Era importante que ésta pudiera saber que trabajaba para un sistema que funcionaba bien, ya que la ineficiencia o la pasividad del poder judicial ante los casos a él sometidos por la policía producía desmoralización y un aumento de las violaciones de los derechos humanos. Era fundamental establecer unas relaciones más constructivas y coherentes entre la policía y el poder judicial. En ese sentido, el Jefe de Policía dijo que, aunque reconocía el apoyo nada despreciable que prestaban la MICIVIH y la MIPONUH a la policía, habría resultado útil la "vigilancia moral" y la presencia de la MICIVIH se hubiera hecho extensiva al poder judicial. El Jefe de la Policía consideró positiva la función preventiva que había desempeñado y el apoyo prestado a la policía local por la MIPONUH y tendría que ser sustituida por un mecanismo alternativo en caso de retirada de la MICIVIH y la MIPONUH.

28. Con respecto al futuro de la fuerza de policía, el Jefe de la Policía señaló tres retos que deberían afrontarse para consolidar el papel de la policía civil en Haití: en primer lugar, debía evitarse su "politización" y que los políticos la utilicen para sus propios fines; en segundo lugar, era preciso luchar contra la corrupción imperante, incluida la relacionada con las drogas; y en tercer lugar, debía combatirse la "gangsterización" (la agrupación de los efectivos de la fuerza de policía en bandas). La Relatora Especial insta a todos los miembros de la fuerza de policía a que afronten esos retos con vistas a establecer una tradición respetada de policía civil en el país.

29. La Relatora Especial se reunió con el Defensor del Pueblo, cuyo cargo se creó en 1997. El mandato de éste es proteger a todos los ciudadanos de las arbitrariedades de los funcionarios del Estado. La mayoría de los casos sometidos a la consideración del Defensor del Pueblo son denuncias contra la policía (de las cuales el 25% por actos de brutalidad). Su Oficina también está explorando la posibilidad de prestar asistencia letrada a los presos que no tengan abogado. Además, el Defensor del Pueblo expresó su preocupación por la situación de la mujer en Haití e indicó que desearía contar en su Oficina con un especialista que se ocupase de las cuestiones relativas a la violación, el acoso sexual y otras conculcaciones de los derechos humanos de la mujer. Dijo que, como consecuencia de las peticiones de las organizaciones de mujeres, tenía la intención de ponerse en contacto con el Ministerio de Justicia para examinar la forma de prestar asistencia a las mujeres víctimas de la violación política. A ese respecto, la Relatora Especial observó con preocupación la grave carencia de recursos humanos y financieros de la Oficina del Defensor del Pueblo, a pesar de la asistencia prestada por el PNUD y los donantes bilaterales. En el momento de su visita, la Oficina del Defensor del Pueblo no tenía ninguna representación fuera de Puerto Príncipe. La Relatora Especial considera que el fortalecimiento de la Oficina y la autorización de que se le sometan casos podrían representar un factor catalítico para afrontar la situación de violencia extrema profundamente arraigada en la sociedad haitiana. El Defensor del Pueblo indicó que, para que su Oficina desempeñe un papel más activo en la promoción y protección de los derechos humanos, habría que aumentar su plantilla actual de 7 personas por lo menos a 25. Sería sumamente importante que el Defensor del Pueblo tuviera representantes en todas las provincias para hacer llegar sus servicios a la población rural, la mayor parte de la cual es analfabeta y no posee medios para desplazarse hasta el lugar de la Oficina del Defensor del Pueblo a fin de presentar sus quejas.

30. El Defensor del Pueblo también informó a la Relatora Especial de que, tras las manifestaciones mensuales organizadas por las agrupaciones de mujeres con el fin de hacer llegar sus inquietudes al Gobierno, se había reunido con el Primer Ministro la semana anterior a la visita realizada por la Relatora Especial en junio de 1999. Durante esa visita, el Primer Ministro había expresado que estaba dispuesto a atender las demandas de las organizaciones de mujeres para tratar de hallar soluciones en cooperación con el Defensor del Pueblo. Éste había decidido formar un comité con todos los grupos de mujeres a fin de examinar posibles estrategias para establecer un orden de prioridades en sus preocupaciones. La Relatora Especial considera que es una iniciativa importante y espera que se hayan realizado progresos desde su visita y que se haya establecido un diálogo entre las organizaciones de mujeres y el Gobierno. También desea apoyar firmemente las recomendaciones relativas a los derechos humanos de la mujer contenidas en el primer informe del Defensor del Pueblo al Presidente y al Primer Ministro, a saber:

- a) La creación en cada ministerio de un comité sobre acoso sexual encargado de examinar todos los problemas que se afrontan en el trabajo y de recibir las denuncias individuales de acoso sexual;
- b) La creación en cada ministerio de una guardería para las empleadas que tienen hijos pequeños;
- c) La coordinación entre el Ministerio de la Condición de la Mujer, el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional a fin de elaborar una estrategia para combatir la violencia contra la mujer (a ese respecto, la Relatora Especial sugirió que se

incluyera también al Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo y al Ministerio de Salud);

- d) La creación de una comisión interministerial encargada de investigar y corregir la discriminación salarial de la mujer.

A. La violencia doméstica

31. En vista de la insuficiencia de garantías legales para combatir la violencia contra la mujer, no es sorprendente que en Haití no exista una legislación especial referente a la violencia doméstica. La violencia contra la mujer se castiga en virtud de las leyes de carácter general contra las agresiones y los malos tratos, según las circunstancias del ataque y el grado de daño causado a la víctima³. La Ministra de la Condición de la Mujer informó de que la violencia doméstica era muy frecuente en Haití, la cual consistía principalmente en palizas y violencia psicológica. Aunque no existían estadísticas sistemáticas y actualizadas sobre la violencia contra la mujer, el Ministerio de la Condición de la Mujer había registrado 2.000 casos de violencia física entre noviembre de 1994 y junio de 1999 (en 1.800 de los cuales los autores eran el esposo o la pareja). Un estudio de 1.705 mujeres realizado en 1996 por el Centre Haïtien de Recherches et d'Actions pour la Promotion Féminine, (CHREPROF) indicaba que en un 36% de los casos la violencia contra la mujer era perpetrada por su pareja y que las formas más comunes de violencia eran la sexual (37%), la física (33%) y la violencia y abusos sexuales (24%)⁴. El estudio también confirmaba que el uso de la violencia no guardaba relación con el nivel de educación, las creencias religiosas, la situación económica o el estado civil, sino que estaba extendido en todas las capas de la sociedad de haitiana. De hecho, la Relatora Especial supo que el 80% de los hombres entrevistados en el estudio consideraban que la violencia contra la mujer era una cuestión estrictamente familiar y trataban de justificarla en los casos en que las mujeres faltaban al respeto o desobedecían a su pareja.

32. La Relatora Especial observó con especial preocupación que tampoco existe un código de la familia en Haití. La falta de una legislación adecuada se agrava por la tendencia a no denunciar y aceptar la violencia contra la mujer como principio, y al mismo tiempo la fomenta. En el estudio mencionado más arriba se indicaba que el 66% de las víctimas nunca denunciaban los actos de violencia por miedo a las represalias y los prejuicios sociales, así como por falta de mecanismos legales y estructuras de apoyo adecuados⁵. La MICIVIH confirmó que la policía no demostraba interés por las preocupaciones de las mujeres víctimas de violencia. La Relatora Especial tomó nota con satisfacción de que la reforma legislativa propuesta por el Ministro de Justicia también incluía un examen del modo más eficaz de abordar la cuestión de la violencia doméstica en la legislación. El Comité de Negociación con los Parlamentarios, que es una coalición de 23 organizaciones de mujeres que colaboran con el Ministerio de la Condición de la

³ Anne Fuller, "Challenging violence: Haitian women unite women's rights and human rights", en Bulletin of the Association of Concerned African Scholars, N° 55/56, primavera/verano 1999.

⁴ Centre Haïtien de Recherches et d'Actions pour la Promotion Féminine, "Violences exercées sur les femmes et les enfants en Haïti", noviembre de 1996.

⁵ *Ibíd.*

Mujer, también ha expresado su preocupación por el hecho de que la violación conyugal no esté tipificada como delito por la legislación y que las leyes relativas al divorcio y el adulterio sean discriminatorias con respecto a la mujer, pues siempre se impone a éstas la carga de la prueba.

33. En respuesta a su pregunta relativa a los servicios que proporciona el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo a las víctimas, se informó a la Relatora Especial de que éste tiene una línea de teléfono especial para los niños maltratados, que generalmente son niñas, las cuales se trasladan a centros de formación gestionados por el Ministerio. También existen centros de salud infantil dotados de psicólogos y trabajadores sociales. La Relatora Especial expresó su preocupación por el hecho de que la asistencia a las víctimas de la violencia doméstica y de otro tipo pareciese concentrarse principalmente en los niños. Aunque el estudio de la CHREPROF mostrase que el 38% de los actos de violencia contra la mujer eran padecidos por niñas de edades comprendidas entre 10 y 18 años, la Relatora Especial tomó nota con profunda preocupación de la información proporcionada por la Ministra de Asuntos Sociales de la inexistencia de centros para acoger a las mujeres víctimas de violencia financiados por el Gobierno. Había uno en Puerto Príncipe administrado por la organización no gubernamental KAYFANM. La Ministra reconoció la necesidad de esos centros, pero consideraba que se necesitaban principalmente para las madres menores de edad (entre 15 y 17 años), que son las que, al parecer más sufren la violencia familiar en Haití. También se informó a la Relatora Especial de que no existen programas de rehabilitación para las mujeres y niñas prostitutas y de que los planes para establecer un centro de formación de esas mujeres en otras actividades generadoras de ingresos no se habían llevado a cabo por falta de fondos. Las dificultades financieras también han obligado a reducir la representación del Ministerio en las provincias, y la Oficina de Protección de la Familia del Ministerio cuenta únicamente con 15 asistentes sociales diplomados. La Ministra también indicó que, debido a la falta de recursos, el Ministerio no estaba en condiciones de llevar a cabo ningún programa para prevenir la violencia contra la mujer.

34. La Relatora Especial reconoce que la falta de recursos limita considerablemente la posibilidad de ofrecer nuevos programas y servicios, pero lamenta que el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo parezca estar dedicando todos los recursos disponibles a financiar programas de formación y talleres para las mujeres, en vez de servicios sociales para las víctimas, que tienen una importancia crucial. La Relatora Especial insta a la Ministra de Asuntos Sociales y Trabajo a que reconsidere sus prioridades de gastos con vistas a reorientar los fondos hacia el suministro de servicios sociales, inclusive centros de acogida, para las mujeres víctimas de violencia.

35. A este respecto, se informó a la Relatora Especial de la iniciativa tomada por la Sra. Frédérique Alexis, la esposa del Primer Ministro, para proporcionar servicios a las mujeres víctimas de violencia. Basándose en investigaciones realizadas en Puerto Príncipe en 1997 y 1998, la Sra. Alexis pudo confirmar que la incidencia de la violencia contra la mujer es relativamente alta y que las mujeres víctimas de violencia generalmente tienen miedo de denunciarlo a la policía. En 1998 creó una oficina en la que 12 empleados, incluidos dos médicos, dos abogados, dos asistentes sociales y un sacerdote, han proporcionado asistencia médica, jurídica y social a 200 mujeres, 50 de las cuales, según las informaciones, habían sido objeto de agresión grave y requerían una intervención inmediata. A fin de poder atender a las mujeres que necesitan asistencia inmediata, la Sra. Alexis ha propuesto la creación de un centro de rehabilitación y reintegración de las mujeres víctimas, para el que estaba recaudando fondos. Se prevé que el "centre d'hébergement" tenga a su disposición autobuses para trasladar al centro

a las mujeres y los niños necesitados por un período de tiempo indeterminado, donde puedan recibir asistencia profesional, participar en programas de rehabilitación y reintegración y contar con una ayuda financiera inicial reembolsable. La Relatora Especial insta a los donantes a que consideren la posibilidad de financiar microproyectos como éste, ya que podría ser el modo más directo de lograr que la asistencia llegue a las mujeres que más la necesitan.

B. Violación y abusos y acoso sexuales

36. La Ministra de la Condición de la Mujer indicó que la violación era un fenómeno frecuente, no sólo en Puerto Príncipe sino también cada vez más en las provincias. En un caso reciente de violación de menores en la región del Plateau Central, no se castigó a los autores hasta que la propia Ministra sometió la cuestión a la atención del Ministro de Justicia. El fenómeno de los "zenglendos", o matones que penetran en cualquier momento en las viviendas para violar y golpear a las mujeres, se inició durante el régimen de Cedras como forma de presión política, pero actualmente se ha convertido en una práctica corriente de las bandas de delinquentes, que aterrorizan a toda la población.

37. Aunque la violación es un delito en virtud del Código Penal de Haití (art. 229), no se considera un delito grave porque no se necesita un juicio con jurado. Por consiguiente, los casos de violación se resuelven en su mayoría financieramente fuera de los tribunales. Por ejemplo, si una niña es violada por su maestro, generalmente se espera que el violador se case con la víctima y no se inicia ninguna causa penal contra el autor del delito. Además, como señala un investigador, la ley nunca define la violación, sino que ésta se clasifica entre los delitos contra la moral ("atteintes aux bonnes moeurs"). Por consiguiente, los tribunales han atribuido a la violación de una mujer que no es virgen menos importancia que a la de una virgen⁶.

38. Muchos interlocutores de la Relatora Especial mencionaron la cuestión de los embarazos de adolescentes que eran objeto de violación y acoso sexual en las escuelas como un grave problema en Haití. Señalaron que cuando una chica era violada por el maestro o el director y quedaba embarazada se la expulsaba de la escuela, cometiendo así una grave violación de su derecho a la educación. Otra forma grave de violencia contra la mujer que se señaló a la atención de la Relatora Especial era la violencia y los abusos sexuales cometidos contra las jóvenes empleadas domésticas. Las familias del medio rural, en particular, a menudo envían a sus hijas adolescentes a trabajar como domésticas ("restavek") para que aporten ingresos a la familia. Esas jóvenes a menudo están a la merced de sus empleadores y, según los datos disponibles, la incidencia de la violencia física y sexual, con el consiguiente embarazo, es alta. Entre noviembre de 1994 y junio de 1999, el Ministerio de la Condición de la Mujer registró 900 casos de mujeres adultas y 1.500 de muchachas de 6 a 15 años que habían sido víctimas de abusos sexuales y agresión. La Relatora Especial expresa su grave preocupación por el número desproporcionadamente alto de muchachas víctimas de violencia. El Ministerio de la Condición de la Mujer informó a la Relatora Especial de que había tratado de ayudar a esas jóvenes y niñas en situación difícil pagándoles el regreso en autobús a sus casas y facilitando su vuelta a una escuela cerca de su hogar.

⁶ Commission Nationale Verité et Justice, "Si M Pa Rele: 29 de septiembre de 1991 - 14 de octubre de 1994", Puerto Príncipe, 1996, pág. 84.

39. En el mismo período (noviembre de 1994 a junio de 1999) el Ministerio había registrado 500 casos de acoso sexual contra mujeres. Sin embargo, la Ministra de la Condición de la Mujer explicó que no se daba publicidad a los casos de acoso sexual, que apenas se consideraba una forma de violencia contra la mujer. Según el Ministerio, no obstante, algunos grupos de mujeres estaban incluyendo esta cuestión en sus campañas de concienciación de la opinión pública a fin de alentar a las mujeres a denunciar y luchar contra el acoso sexual. La Relatora Especial tomó nota complacida de que el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo estaba arbitrando la inclusión de disposiciones contra el acoso sexual en los reglamentos internos de las empresas, y de que el Ministerio estaba participando en el comité de redacción que propondría una legislación revisada al Parlamento.

40. En respuesta a una pregunta relativa a los servicios prestados a las víctimas, la Ministra de la Condición de la Mujer informó a la Relatora Especial de que las instituciones judiciales y políticas estaban sencillamente desbordadas por las demandas de indemnización y las peticiones de asistencia, debido al elevado número de mujeres víctimas de violencia, especialmente a raíz del golpe de Estado. La Ministra dijo que, a fin de proporcionar una asistencia efectiva a las víctimas, debería reforzarse el Ministerio de manera considerable. En este contexto, la Ministra indicó que su Ministerio tenía el mandato de ocuparse de los casos de violencia contra la mujer por intermedio de su Comité sobre la Violencia contra la Mujer. No obstante, debido a la falta de personal y de una formación adecuada en la tramitación de los casos, el Ministerio no ha podido llevar a cabo esas tareas. La Ministra mencionó que ni siquiera disponía de un abogado o experto jurídico en el Ministerio, y que dependía de la ayuda de dos licenciados en derecho.

C. Mujeres detenidas

41. En el momento de la visita de la Relatora Especial había en Haití un total de 3.500 presos, de los cuales 150 eran mujeres. Sin embargo, no existen cárceles de mujeres en el país. Las reclusas comparten instalaciones mixtas con hombres y niños, no siempre en pabellones separados, a excepción de Fort National, una cárcel de Puerto Príncipe. Cuando la Relatora Especial inquirió por la falta de cárceles de mujeres, el Ministro de Justicia explicó que, en 1995, el Presidente Aristide había separado provisionalmente a todas las mujeres y niños presos en Fort National con objeto de construir una cárcel de mujeres. En 1999, sin embargo, esas medidas provisionales seguían vigentes. El Ministro de Justicia informó a la Relatora Especial de que había creado una comisión encargada de estudiar la situación de las reclusas. Un resultado inmediato fue la puesta en libertad de 30 mujeres. El estudio tiene por objeto determinar claramente la situación de todas las reclusas en Haití, teniendo en cuenta especialmente que el 90% se encuentra en situación de prisión preventiva (en espera de juicio) y sólo sobre un 10% pesa una sentencia firme de condena de privación de libertad. Según el Ministro de Justicia, estos datos ponen de manifiesto un defecto más grave del sistema, a saber, el modo tradicional de llevar a cabo las investigaciones por las que los presuntos autores algunas veces son condenados antes de que termine la investigación. El Ministro declaró que tenía la intención de cambiar la situación a fin de que "la prisión sea una excepción y no la regla".

42. El hacinamiento y las condiciones inadecuadas de detención en Haití se ven agravadas por el hecho de que por definición no hay cárceles en todo el país, sino únicamente centros de detención o instalaciones penitenciarias. Por lo tanto, falta el aspecto de rehabilitación y reintegración. La Directora de Fort National, con la que se entrevistó la Relatora Especial, subrayó que Fort National no era una cárcel sino simplemente un cuartel habilitado al efecto, lo

que significaba que no se había construido para fines de detención prolongada. El Ministro de Justicia indicó que había planes para integrar un programa de rehabilitación y reintegración, de un costo estimado de 3 a 4 millones de dólares, en el sistema de prisiones. No obstante, había una grave falta de fondos, en especial porque los donantes preferían proporcionar asesoramiento y recursos humanos más que invertir en la construcción de estructuras institucionales o contribuir a ella. El Ministro defendió un enfoque global de la asistencia, que combinara la organización de cursos de formación y seminarios con la prestación de apoyo financiero para infraestructura.

43. En el momento de la visita de la Relatora Especial, en junio de 1999, había 116 reclusos en la cárcel de Fort National de Puerto Príncipe, de los cuales 71 eran mujeres. La Relatora Especial observó con preocupación que sólo sobre 4 de las 71 reclusas pesaba una sentencia de condena; muchas de ellas llevaban hasta dos años en prisión preventiva. También había 11 muchachas menores de 18 años de edad, de las cuales 2 habían sido condenadas y compartían una celda con mujeres. Además, una de las celdas de Fort National estaba vacía a raíz de un intento de fuga y disturbios, y en una tercera celda había muchachos menores de 18 años. La Relatora Especial desearía recordar las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el trato de los reclusos, en especial la regla 8 d), que dispone que los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos. Aun reconociendo los esfuerzos realizados por la nueva dirección de Fort National, la Relatora Especial observó especialmente que las condiciones de hacinamiento y muy por debajo de la norma de las dependencias destinadas a vivienda y aseo, lo cual no era sorprendente ya que 82 reclusas compartían una sola nave sin muros ni cortinas de separación, carentes de toda intimidad.

44. La Relatora Especial observa que en Fort National hay guardias de ambos sexos, no obstante la norma 53 3) de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el trato de los reclusos, que estipula que la vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente por funcionarios femeninos. Se informó a la Relatora Especial del caso de una muchacha de 15 años que había ingresado virgen en la cárcel de Cap Haitien y quedó embarazada. La MICIVIH se hizo cargo de su caso, pero después de dar a luz la muchacha se escapó del hospital. A ese respecto, la Relatora Especial acogió con satisfacción el anuncio del Ministro de Justicia de que preveía contratar a 100 guardias femeninos para que se ocuparan exclusivamente de las reclusas. La Relatora Especial insta al Gobierno de Haití a que dedique recursos a los efectos de la plena aplicación de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el trato de los reclusos con vistas a garantizar la seguridad de la población carcelaria y unas condiciones de vida adecuadas.

45. El PNUD informó a la Relatora Especial de un proyecto destinado a rehabilitar el sistema penitenciario de Haití. Estaba, financiado principalmente por el Gobierno del Canadá y USAID, y abordaba cuestiones como la separación de hombres, mujeres y niños, el hacinamiento, y la creación de un mecanismo de seguimiento de la población penitenciaria. En el momento de la visita, había 15 centros de detención y todos ellos tenían archivos funcionales de los presos. La Relatora Especial observó que se trataba de uno de los proyectos más exitosos de los ejecutados por las Naciones Unidas en cooperación con la MICIVIH. No obstante, ese proyecto concedía una atención prioritaria a la Cárcel Central de hombres, y a la Relatora Especial le preocupaba que el PNUD, en cooperación con el Ministerio de la Condición de la Mujer, tuviera muchas dificultades a la hora de obtener financiación para su proyecto en favor de las reclusas.

46. La Relatora Especial también hizo suyas las preocupaciones expresadas en un estudio de la MICIVIH sobre los derechos de las mujeres y los menores presos, en el sentido de que las

reclusas en las distintas instalaciones penitenciarias comparten los mismos pabellones que los hombres, en total violación de las normas internacionales de prisiones, por lo que están cada vez más expuestas a abusos sexuales y violencia por parte de los reclusos⁷. Por otro lado, cuando se traslada a las reclusas al único centro de detención exclusivamente para mujeres y menores, en Puerto Príncipe, la distancia agrava el factor de separación de la familia.

47. Se informó a la Relatora Especial de que la Ministra de la Condición de la Mujer había iniciado una actividad de concienciación en Fort National el Día de la Madre en mayo de 1999 que había tenido como resultado la liberación de 30 reclusas por decreto del Ministro de Justicia.

D. Violación política

Testimonio de Immacula (33 años)

48. En la noche del 16 de octubre de 1991, Immacula estaba en casa con su marido y sus seis hijos cuando varios hombres enmascarados y fuertemente armados saltaron la cerca y penetraron en la casa. Arrojaron a Immacula al suelo, y después de esposar a su marido tres de ellos la violaron, la golpearon en el rostro y la maltrataron delante de su marido y sus hijos. El hijo más pequeño, que tiene 6 años, sigue repitiendo lo que sucedió aquella noche. Como su esposo era partidario de Aristide, los encarcelaron durante 6 meses, después de lo cual tuvieron que esconderse. Una vez, cuando Immacula y su familia vivían temporalmente con su cuñada, sus perseguidores la siguieron y penetraron en la casa, la volvieron a violar y también violaron a su cuñada. Ésta murió como consecuencia de las heridas sufridas durante la brutal violación, y desde entonces Immacula ha tenido que hacerse cargo también de los hijos de su cuñada. No ha recibido ninguna asistencia ni indemnización por los actos de violencia sufridos.

Testimonio de Saintanie (42 años)

49. El esposo de Saintanie era un militante en pro de la democracia. El 23 de septiembre de 1993 se mencionó su nombre en un programa radiofónico junto al de otros activistas en favor de la democracia. Aquella noche seis hombres enmascarados vestidos de negro forzaron su entrada en la casa, tres de ellos se llevaron al marido y los otros tres violaron a Saintanie. Los seis hijos fueron golpeados con las pistolas. Tras el incidente, Saintanie y sus hijos hubieron de abandonar su casa y huyeron a otro barrio. Se dirigieron a un refugio para los partidarios de Aristide, donde les proporcionaron asistencia médica y psicológica y alguna asistencia financiera para sufragar un nuevo lugar en donde vivir. Saintanie sigue sintiéndose violentada todos los días y está desilusionada porque, a pesar del regreso del Presidente Aristide, nada ha sucedido. Ni siquiera se han aplicado las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Justicia. Su marido nunca volvió. Ahora Saintanie ha presentado una demanda ante los tribunales y espera los resultados. No tiene muchas esperanzas.

⁷ Claudine Jacob, "Droit des mineurs et des femmes detenus", MICIVIH, Puerto Príncipe, septiembre de 1997.

Testimonio de Ellesibles (35 años)

50. En 1990, Ellesibles pertenecía a un grupo de militantes clandestinos que se reconstituyó como tal después del golpe de Estado para apoyar a Aristide. El 2 de julio de 1994 cuatro hombres penetraron en su casa, la arrastraron a ella y a su madre afuera, y tras tenderla en el suelo bajo un árbol la golpearon y violaron delante de su madre. Esos hombres buscaban al coordinador del grupo. Éste vino a buscarla después del incidente y la llevó a un escondite para víctimas de violación política. Allí recibió asistencia médica y jurídica, junto a otros 150 miembros de su grupo, de los cuales 60 habían sido violados. Ellesibles ha vivido en el mismo escondrijo desde 1994, pero cuando la Relatora Especial la entrevistó estaba desesperada porque su refugio estaba a punto de ser cerrado por falta de recursos. No tiene hogar ni trabajo. Se echó a llorar diciendo: "Todo esto me duele, me duele mucho".

Testimonio de Esperance (28 años)

51. El 13 de febrero de 1993 un grupo de hombres armados penetraron en la casa en la que Esperance vivía con sus padres, que eran activistas políticos. Revolvieron todo, violaron a su hermana de 19 años, la golpearon a ella y a sus hermanos, a su madre y a su padre y se llevaron a éste. Esperance no lo ha vuelto a ver. Esperance huyó a una provincia del sur. Cuando su madre murió en 1995 traumatizada por la pérdida de su marido, Esperance tuvo que dejar la escuela para ocuparse de sus hermanos más jóvenes. Como no tenían una vivienda permanente, su familia está dispersa y los hermanos se refugian a la sazón donde pueden. Esperance denunció el caso ante la Comisión de la Verdad y la Justicia cuando tuvo noticia de su existencia. No hay ninguna novedad en relación con su caso. Su hermana sigue sufriendo graves secuelas como consecuencia de la violación ("le corps se souvient", "el cuerpo recuerda").

Testimonio de Yvette (29 años)

52. El 4 de febrero de 1994 Yvette fue con otras mujeres al mercado, como todos los días, para vender sus productos, aunque el Front révolutionnaire pour l'avancement et le progrès du pays (FRAPP) había lanzado un llamamiento a la huelga. Poco después, unos hombres armados las atacaron, destruyeron sus mercancías y las golpearon. Como dijo Yvette "les armes ont chanté" ("las pistolas cantaron"). Esa misma noche, unos hombres vestidos con uniforme del ejército y enmascarados penetraron en su casa y empezaron a llevarse cosas, pasándoselas a un sargento que esperaba fuera. Los enmascarados violaron a Yvette y golpearon a su hermana porque tenía el período y no la violaron. Después del incidente, Yvette y su hermana recibieron asistencia médica, psicológica y en materia de vivienda de la SOFA. No obstante, desde entonces han ido de un lugar a otro, pues estaban demasiado asustadas para volver a su casa porque los autores de las violaciones siguen libres. Yvette es una de las demandantes en una causa colectiva incoada por un grupo de mujeres víctimas de violación política. Siguen esperando el resultado.

Testimonio de Suzette (35 años)

53. El novio de Suzette era un militante demócrata; se encontraba en la calle con sus compañeros la noche del 20 de octubre de 1993. Aquella noche seis hombres enmascarados penetraron en casa de Suzette. La apalearon, le dieron patadas en el estómago y tres de ellos la violaron. Suzette estaba embarazada de siete meses. Le hicieron preguntas sobre su novio. Una semana después Suzette tuvo contracciones y sangró abundantemente. Aunque el médico

hizo lo posible por salvar al niño, éste nació muerto. Suzette recibió asistencia médica y ayuda de la SOFA, pero contrajo enfermedades de transmisión sexual y sufre tifus y paludismo recurrentes. Se ha ido a vivir con su madre por miedo a volver a su casa.

Testimonio de Marie-Françoise (35 años)

54. Marie-Françoise, que estaba embarazada de siete meses, se encontraba en casa con su marido, su hija y su hermano la noche del 13 de agosto de 1994, cuando hubo un apagón en su distrito de Puerto Príncipe. Salieron todos al jardín para respirar aire fresco, cuando una furgoneta blanca se paró en la calle junto a ellos. Diez u once hombres enmascarados saltaron de la furgoneta y los obligaron a entrar en la casa. Dispararon un tiro a su hermano a quemarropa y tres de ellos violaron a Marie-Françoise a pesar de encontrarse en avanzado estado de gestación. La golpearon en la cabeza. Su marido desapareció aquella noche y nunca volvió. A pesar del trauma, Marie-Françoise dio a luz a un hijo sano. No obstante, todavía le duele la cabeza de los golpes que le dieron. Basándose en un certificado médico en el que se documenta su violación, Marie-Françoise presentó una denuncia colectiva ante la Comisión de la Verdad y la Justicia, pero no se ha tomado ninguna medida con posterioridad a la publicación de las recomendaciones de la Comisión.

55. Las voces de Immacula, Saintanie, Ellesibles, Esperance, Yvette, Suzette y Marie-Françoise son sólo unas pocas. Durante su misión, la Relatora Especial se entrevistó con 32 mujeres víctimas de violación política cuyas historias son todas igualmente espantosas, brutales e inhumanas y que representan a innumerables mujeres de Haití que han experimentado el mismo horror. La pauta de la violencia siempre es la misma: las víctimas eran ellas mismas o eran parientes de activistas en pro de la democracia; los incidentes ocurrieron al caer la tarde o por la noche en las casas de las víctimas; los atacantes formaban grupos de 3 a 12 hombres enmascarados armados, que algunas veces llevaban uniforme militar, los cuales saqueaban las casas y golpeaban, mataban y violaban a las víctimas; después secuestraban a los hombres de la familia y abandonaban a las víctimas a su suerte, y a veces volvían con nuevas amenazas e intimidaciones.

56. No se conoce exactamente el número de mujeres víctimas de violación política, que fue más elevado durante el período de 1991 a 1994. No obstante, sólo entre enero y mayo de 1994, la MICIVIH informó de 66 casos de violación⁸, y una investigación realizada por Vigilancia de los Derechos Humanos en 1994 daba cuenta de "una campaña de violaciones sistemáticas de los derechos humanos que claramente incluye la violación"⁹. La Comisión de la Verdad y la Justicia documentó 140 casos de violación política, pero calculaba que, en vista de la falta de denuncias y otras circunstancias, la incidencia real de la violación política podría ser casi 12 veces superior, es decir, cerca de 1.680 casos¹⁰.

⁸ Comunicado de prensa de la MICIVIH/OAS, CP/94/28, junio de 1994.

⁹ Human Rights Watch/National Coalition for Haitian Refugees, "Rape in Haiti: a weapon of terror", Nueva York, 1994.

¹⁰ Comisión Nationale Verité et Justice, "Si M Pa Rele; 29 de septiembre de 1991 - 14 de octubre de 1994", Puerto Príncipe, 1996, pág. 42.

57. Las mujeres víctimas de violación política sufrieron una violencia increíble durante el régimen de Cedras; sin embargo, cinco años después su situación no ha cambiado. Padecen trauma psicológico y síndromes postraumáticos, inclusive depresión latente; sus condiciones físicas son graves, pues padecen, entre otras, enfermedades de transmisión sexual e infección por el VIH/SIDA, debido a las múltiples violaciones y los actos de brutalidad; sus hijos recuerdan y están traumatizados; sus maridos han sido asesinados o las han abandonado; no tienen una vivienda permanente; no tienen trabajo; les han robado sus productos; no disponen de suficientes alimentos o asistencia médica; tampoco tienen dinero para pagar la escuela de sus hijos; pero, lo peor de todo, es que los autores de estos crímenes siguen acosándolas y vagando libremente -nunca se ha hecho justicia, y las mujeres de Haití se ven obligadas a convivir con el pasado todos los días de su vida.

58. En el artículo 3 del Decreto presidencial por el que se creaba la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, se asignaba a ésta el mandato de "prestar atención especial a las violaciones de los derechos humanos cometidas por personas o grupos de personas, sobre todo contra mujeres víctimas de ataques de carácter sexual cometidos con fines políticos"¹¹. En la investigación especial sobre la violencia contra la mujer que figura en su informe publicado en 1996, la Comisión observaba que, desde 1991, se habían detectado numerosos casos de violación que formaban parte de una estrategia política sistemática de intimidación y represión general contra quienes se oponían al golpe de Estado. La Comisión sostenía que dicha violación se cometió sin duda con fines políticos, como se desprendía claramente de las amenazas, los insultos y las acusaciones de los autores contra las víctimas¹². La Comisión llegó a la conclusión de que la violación constituía un arma política, un instrumento para intimidar y castigar a las mujeres por sus vínculos directos o indirectos con la oposición al golpe de Estado. La Comisión concluía que, como la violación y la violencia sexual contra las mujeres fueron perpetradas por funcionarios y agentes del Estado (miembros del ejército, jefes de sección, miembros de fuerzas paramilitares como el Front révolutionnaire armé pour le progrès de Haïti/FRAPH y "zenglendos", todos los cuales actuaban por instigación del ejército, apoyados por éste o con su consentimiento) con fines políticos, estos actos violaban claramente las obligaciones que incumbían a Haití en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (El párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de opinión política o de otra índole". El artículo 1 de la Convención Americana contiene una disposición similar.)

59. La Comisión también consideró que los actos de violación política eran análogos a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y conculcaban el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el párrafo 2 del artículo 5 de la Convención Americana. Además, la Comisión estimó que, por su propia naturaleza, los actos de violación política podían considerarse equivalentes a tortura, ya que en virtud del derecho consuetudinario internacional la violación se consideraba una forma de tortura cuando se cometía con fines políticos.

¹¹ Ibid., pág. 40.

¹² Ibid., págs. 40 y 41.

Por consiguiente, aunque Haití no es parte en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes, la Comisión consideraba que esos actos contravenían las obligaciones de Haití en virtud del derecho consuetudinario internacional¹³. Por último, la Comisión sostuvo que los actos de violación y violencia sexual perpetrados contra mujeres por funcionarios y agentes del Estado con fines políticos podían considerarse delitos de lesa humanidad, debido a su gravedad y carácter sistemático y porque constituían tortura con arreglo al argumento expuesto más arriba.

60. Basándose en estos argumentos jurídicos sustantivos, la Comisión formuló varias recomendaciones constructivas y progresistas que la Relatora Especial apoya plenamente:

- i) en el Código Penal haitiano, debería definirse la violación como un ataque contra la integridad física y el bienestar de la víctima, y no un ataque contra el honor;
- ii) las normas que regulan la certificación médica de la violación deberían revisarse para hacer extensiva esa facultad a otros profesionales de la salud en algunas zonas remotas donde no hay médicos;
- iii) la ciencia forense debería enseñarse y volverse a aplicar oficialmente;
- iv) deberían elaborarse programas de formación y enseñanza destinados a todas las personas que están en contacto con las mujeres víctimas de violencia y que les presten servicios, incluidos los jueces y los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de la ley;
- v) deberían establecerse servicios especializados para las mujeres víctimas de violencia, inclusive programas de asesoramiento, rehabilitación y reintegración;
- vi) deberían llevarse a cabo campañas de concienciación de la opinión pública;
- vii) deberían establecerse procedimientos judiciales contra los presuntos autores de los actos de violación a que se hace referencia en el informe de la Comisión, con el fin de que sean debidamente castigados y las víctimas indemnizadas;
- viii) Haití debería ratificar, entre otras, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana de Belem do Para¹⁴.

61. A la luz de su exhaustivo análisis fáctico y jurídico de los actos de violación política, la Relatora Especial le expresa su preocupación grave por el hecho de que no se hayan aplicado las recomendaciones sustantivas de la Comisión de la Verdad y la Justicia. La Relatora Especial tomó nota con satisfacción, en su diálogo con el Ministro de Justicia, de que éste había creado un comité de seguimiento encargado de informar sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité. El comité de seguimiento había recomendado la creación de una comisión nacional de

¹³ *Ibíd.*

¹⁴ *Ibíd.*, pág. 85.

reparaciones con tres objetivos: formular una política de indemnizaciones; propiciar la reintegración y rehabilitación de las víctimas; y prestar asistencia jurídica para llevar a juicio a los autores. El Ministro estaba preparando un proyecto de ley para someterlo a la aprobación del Presidente, a fin de que se estableciera la comisión nacional en julio de 1999. La Relatora Especial observó que el Ministerio de la Condición de la Mujer estaría representado en la comisión nacional.

IV. EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y DE MUJERES

62. La Relatora Especial se declaró sumamente impresionada y conmovida por la labor de las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos de Haití. Esas organizaciones han mantenido presente la cuestión de la violencia contra la mujer y se mostraban muy activas a la hora de hacer que las víctimas rompiesen el silencio y de infundirles valor para exponer sus casos. Muchas víctimas hablaron a la Relatora Especial por la confianza que les habían infundido las organizaciones no gubernamentales de mujeres y de derechos humanos.

63. Muchas de las organizaciones no gubernamentales y grupos de mujeres con que se entrevistó la Relatora Especial representan y trabajan con mujeres víctimas de violencia o están compuestas por las propias víctimas que han visto la necesidad de organizarse para obtener justicia. No obstante, la falta de pruebas y documentación, incluidos los certificados médicos para las víctimas de violación, así como la simple escasez de fondos, dificultan gravemente su labor. No obstante, la Relatora Especial quedó impresionada por el número de iniciativas importantes que han emprendido esos grupos en favor de las mujeres víctimas de violencia, a falta de todo apoyo gubernamental o indemnización oficial.

64. En noviembre de 1997, algunas asociaciones de mujeres haitianas se movilaron debido a la falta de medidas gubernamentales para procesar a los autores de violación política y para aplicar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Justicia, y organizaron un Tribunal Internacional sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Haitianas. Ese Tribunal oyó los testimonios de las víctimas de violencia y formuló recomendaciones contra la violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia política y la violencia contra las mujeres discapacitadas. El grupo internacional de jueces observó graves deficiencias en el sistema judicial y en la actuación de la policía, falta de eficacia y de iniciativa, y limitaciones en los servicios sociales y de salud pública. El grupo recomendó que el Gobierno cooperase con las organizaciones de mujeres en la redacción de una amplia legislación con miras a eliminar la violencia contra la mujer. El grupo también recomendó, entre otras cosas, lo siguiente:

- reformas en el sistema de justicia penal, incluido el establecimiento de una unidad compuesta por funcionarias de policía encargada de recibir las denuncias y llevar a cabo investigaciones sobre la violencia contra las mujeres;
- cambios en los procedimientos judiciales, incluida la introducción de salvaguardias para los demandantes y los testigos en los juicios;
- el establecimiento de centros de acogida de mujeres víctimas de violencia;

- la elaboración de programas de educación en las escuelas destinados a eliminar los estereotipos de género y a impartir enseñanza en materia de derechos humanos y educación sexual;
- la legalización del aborto en los casos de violación, incesto y peligro para la salud de la mujer;
- la enmienda del Código Penal para reconocer las uniones libres e introducir el adulterio como motivo de divorcio¹⁵.

65. La KAYFANM tiene una oficina que se dedica exclusivamente a las mujeres víctimas de violencia, recibe las denuncias de violación y proporciona asistencia médica, jurídica y psicológica. La organización cuenta con un abogado y colabora con otras asociaciones o clínicas privadas en la prestación de asistencia médica. La KAYFANM también alberga hasta tres días a mujeres víctimas de violencia, pero el espacio es insuficiente para atender la demanda.

La SOFA es una organización de mujeres que dirige una clínica para mujeres víctimas de violencia. La delegación de la Relatora Especial visitó esta clínica y se entrevistó con mujeres víctimas de la violencia. La ENFOFANM publica una revista mensual, Ayiti Fanm, que ha informado de todos los casos conocidos de violencia contra mujeres que se cree que han sido cometidos por militares tras el golpe de Estado, inclusive casos de violación política.

La FANMDJAM ha establecido una escuela para 200 hijos de mujeres víctimas de violación, ya que muchas de ellas no disponen de medios para pagar los derechos de escolaridad de sus hijos.

66. No obstante, cuando la Relatora Especial preguntó cuáles son las prioridades de las organizaciones de mujeres de haitianas todas respondieron sin lugar a dudas: obtener justicia para las víctimas de violencia política. En realidad, la mayoría de los grupos llevaron todos los casos conocidos de violencia política contra mujeres a los tribunales tras la vuelta al orden constitucional en Haití para que se juzgaran y concediera indemnización. Muchas organizaciones indicaron que, más que indemnizaciones individuales, las víctimas y sus representantes querían obtener una respuesta política del Gobierno.

67. En el curso de conversaciones, se informó a la Relatora Especial de otras preocupaciones. Los miembros del Comité de negociación con los parlamentarios sostenían que la asistencia procurada por la comunidad internacional con respecto a la violencia contra la mujer carecía completamente de coordinación y que los programas se habían ejecutado sin consultar al Gobierno o las agrupaciones locales de mujeres. A su juicio, la campaña interinstitucional de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra la mujer ("Yon vi kote vyolans pa ladan, se dwa nou tout") había fracasado por falta de consultas y colaboración con las organizaciones locales. Los representantes también advirtieron a la Relatora Especial de que los organismos de las Naciones Unidas que operaban en el país creían en el mito de que los grupos de mujeres locales no colaboraban entre sí. En una reunión del Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de Género, los organismos de las Naciones Unidas que

¹⁵ Anne Fuller, 1999 (véase la nota 3).

participan en la campaña para la eliminación de la violencia contra la mujer indicaron a la Relatora Especial que, de hecho, muchas organizaciones no gubernamentales se habían negado a cooperar con ellas, en gran parte porque habían fracasado los esfuerzos de las Naciones Unidas para mediar entre las organizaciones no gubernamentales internacionales y locales con miras a su participación común en la campaña. Sin embargo, el Grupo sobre Cuestiones de Género, aseguró a la Relatora Especial su firme disposición a colaborar más estrechamente con las organizaciones no gubernamentales nacionales en el futuro, especialmente en la campaña para la eliminación de la violencia contra la mujer. Los organismos de las Naciones Unidas reconocieron plenamente que sin una cooperación sustantiva y el apoyo de los grupos de mujeres de Haití la campaña no sería significativa ni eficaz.

68. Aunque la Relatora Especial apoya plenamente la participación de las organizaciones locales y nacionales en los programas financiados y ejecutados por los asociados internacionales, pudo detectar cierta rivalidad entre las organizaciones de mujeres más "intelectuales" y los grupos activistas locales. A la vista de los escasos recursos con que cuenta el país, en particular para programas de defensa de los derechos de la mujer, la Relatora Especial insta a todas las organizaciones de mujeres haitianas a que colaboren entre sí para alcanzar los mismos objetivos y con la comunidad internacional, ya que no hay otra alternativa si se quiere lograr la justicia.

69. Durante su visita, la Relatora Especial tuvo ocasión de participar en una reunión del Grupo Interinstitucional sobre Cuestiones de Género, en la que los organismos de las Naciones Unidas presentes en Haití compartieron con ella información sobre los programas que estaban ejecutando en relación con la violencia contra la mujer. Los representantes de la MICIVIH informaron a la Relatora Especial de que desde 1995 este organismo había incluido la cuestión de los derechos humanos de la mujer y de la violencia contra la mujer en sus programas. Desde entonces, la MICIVIH de Puerto Príncipe y sus representantes en nueve provincias han colaborado con organizaciones no gubernamentales y con los medios de comunicación en espacios radiofónicos, programas de televisión y reuniones, así como en el suministro de asistencia financiera a algunas organizaciones.

70. Desde principios de 1999, la MICIVIH transmite dos programas radiofónicos nacionales en los que se debaten posibles cambios en la legislación vigente, incluidas las disposiciones relativas al adulterio y a la percepción de la violación en el sistema de la justicia penal. Además de impartir formación especializada a los alumnos de la escuela de policía en lo referente a la violencia contra la mujer y de prestar apoyo a la Oficina del Defensor del Pueblo, la MICIVIH también informó a la Relatora Especial de la inclusión de un componente relativo a la violencia contra la mujer en un proyecto conjunto de alfabetización MICIVIH/SEA (Secrétaire d'État pour l'Alphabétisation). En el marco de ese proyecto se pretende haber formado a 600 alfabetizadores en los nueve departamentos del país al final de 1999 mediante una serie de seminarios de dos días de duración. La Relatora Especial elogia el hecho de que se haya incluido la cuestión de la violencia contra la mujer en ese proyecto, sobre todo porque permitirá divulgarla en las provincias. Además las bases de la MICIVIH en los nueve departamentos de Haití desarrollaron actividades semanales con organizaciones de mujeres relativas a los derechos de la mujer y la violencia contra ésta en el marco de programas de radio, sesiones de formación y debates en las comunidades. Las actividades culturales y los festivales de teatro celebrados en Jérémy y Cap Haïtien también se concentraron en los derechos de la mujer y en la cuestión de la violencia contra la mujer.

71. La MICIVIH había entablado conversaciones con el Ministerio de Educación para tratar de incluir la educación en materia de derechos humanos en los planes de estudios primarios y secundarios, un proyecto que lamentablemente aún estaba pendiente dos años después de haber sido propuesto.

72. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) está formando a la fuerza de policía en cuestiones relativas a la salud reproductiva, con inclusión de la violencia contra la mujer, la planificación familiar y las enfermedades de transmisión sexual. Esta formación se considera especialmente importante en vista del elevado número de casos de VIH/SIDA entre los policías (20%). De hecho, la fuerza de policía está considerada un grupo de riesgo en el contexto del VIH/SIDA (la prevalencia en la población en general es del 6% en las zonas rurales y del 10% en las urbanas). La formación que ofrece el FNUAP a la policía se centra en cambiar la imagen de la policía de cara al exterior y dentro de ella para que se los considere como agentes de cambio en sus comunidades. Por consiguiente, es necesario que modifiquen sus propias pautas de comportamiento. La UNESCO también ha cooperado con el FNUAP y el Ministerio de Educación en la elaboración de un programa escolar de salud reproductiva.

73. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha colaborado con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales en la elaboración de propuestas de revisión de la legislación relativa a los derechos de la mujer y del niño. También participó en una campaña de capacitación comunitaria para hacer frente a la violencia contra la mujer, en cooperación con las organizaciones no gubernamentales locales. El UNICEF también ha sido contactado por la policía solicitando su asistencia y cooperación para afrontar la difícil situación de los niños en circunstancias especialmente adversas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que estaba dispuesta a cooperar en la campaña interinstitucional en los medios de comunicación y a examinar la posibilidad de elaborar un programa sobre la violencia contra la mujer en relación con la repatriación forzosa y la reintegración de la mujer a la sociedad.

V. RECOMENDACIONES

A. A nivel internacional

74. La Relatora Especial insta a que la nueva presencia de las Naciones Unidas en Haití continúe las funciones de la MIPONUH de respaldo, seguimiento y orientación de la fuerza de policía nacional en su labor y, además, garantice la continuidad en la formación de la policía llevada a cabo por la MICIVIH en materia de los derechos humanos de la mujer y la violencia contra ésta como contribución fundamental a un aumento de las denuncias de los casos de violencia contra la mujer, con objeto de combatir este fenómeno.

75. La Relatora Especial recomienda que los fondos internacionales de asistencia al desarrollo, tanto multilaterales como bilaterales, no se destinen únicamente a proporcionar conocimientos especializados y recursos humanos, ya que muchos no llegan a utilizarse debido a la falta de estructuras institucionales de ejecución de proyectos y programas.

B. A nivel nacional

76. La Relatora Especial insta al Gobierno de Haití a que ratifique sin más demora el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

77. La Relatora Especial insta al Gobierno de Haití a que cumpla las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional relativo a los derechos humanos armonizando todas las disposiciones pertinentes de la legislación nacional de Haití con las normas internacionales y cumpliendo sus obligaciones en materia de presentación de informes a los órganos de supervisión de los tratados. A ese respecto, la Relatora Especial insta firmemente al Gobierno de Haití a que coopere con las organizaciones no gubernamentales y de mujeres con vistas a preparar un amplio informe de síntesis para presentarlo al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sin más demora.

78. La Relatora Especial insta al Gobierno de Haití a que aplique las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y a que adopte medidas para castigar a los culpables e indemnizar a las víctimas. Las más altas autoridades del país deben condenar la violación política en los términos más enérgicos.

79. La Relatora Especial insta al Gobierno de Haití a que enmiende su legislación relativa a la violación para armonizarla con las normas internacionales y a que promulgue nuevas leyes sobre la violencia doméstica y al acoso sexual.

80. La Relatora Especial insta al Gobierno de Haití, a las organizaciones no gubernamentales y a los organismos de las Naciones Unidas a que lleven a cabo investigaciones y proporcionen datos empíricos sobre los incidentes de violencia contra la mujer, a fin de evaluar la verdadera naturaleza del problema con que se enfrenta la sociedad de Haití.

81. La Relatora Especial insta a que se refuerce tanto financiera como sustantivamente el Ministerio de la Condición de la Mujer, en especial con personal cualificado jurídicamente para recibir y tramitar las denuncias de violencia contra la mujer y poder enviar representantes a los nueve departamentos.

82. La Relatora Especial pide que se asignen a la Oficina del Defensor del Pueblo más recursos, tanto humanos como financieros, incluidos especialistas en materia de género, a fin de que pueda tener representación en todas las provincias y abarcar a toda la población.

83. La Relatora Especial insta al Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo a que reasigne algunos fondos para proporcionar servicios sociales a las víctimas de violencia, inclusive el establecimiento en Puerto Príncipe y en todos los departamentos del país de centros de acogida de mujeres maltratadas.

84. La Relatora Especial insta a que todos los departamentos del país habiliten al menos un centro de detención en el que las reclusas puedan estar separadas de los hombres, de conformidad con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el trato de los reclusos.

Anexo

LISTA SELECTIVA DE PERSONAS CON LAS QUE SE ENTREVISTÓ
LA RELATORA ESPECIAL DURANTE SU VISITA

Sra Geri B. Préval	Primera Dama
Sr. Jacques E. Alexis	Primer Ministro
Sra. Frédérika Alexis	Esposa del Primer Ministro
Sr. Fritz Longchamp	Ministro de Relaciones Exteriores
Sra. Nonie H. Mathieu	Ministra de la Condición de la Mujer
Sr. Camille Leblanc	Ministro de Justicia
Sra. Marthilde Flambert	Ministra de Asuntos Sociales y Trabajo
Sr. Pierre Denizé	Director General de la Policía Nacional de Haití
Dr. Louis E. Roy	Defensor del Pueblo
Sra. Grassieux	Directora de la Cárcel de Fort National
Sr. Julian Harston	Representante Especial del Secretario General, MIPONUH
Embajador Colin Granderson	Director Ejecutivo, MICIVIH
Sr. Óscar Fernández Taranco	Coordinador Residente, Representante Residente del PNUD
Sra. Jacqueline Rips	Especialista en materia de género, PNUD

La Relatora Especial se reunió con miembros del Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de Género, inclusive representantes de la MICIVIH, el FNUAP, el UNICEF, la OIM, la UNESCO y la OMS.

La Relatora Especial también se reunió con representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales y agrupaciones de mujeres: FAVILEK, MAPVIV, SOFA, KAYFANM, CRAD (Seksyon Fanm), FANMYOLA, ENFOFANM, CNEH (Seksyon Fanm), Association Droit et Justice, Fédération 30 Septembre, Association des Victimes du Carrefour-Feuilles, FANMDJANM, Haïti Solidarité International, Centre F. Joseph de Promotion des Droits Humains, Union des Femmes Têtes Ensembles Pour La Vie Meilleure.
